

Informe Dumont

El desorden de nuestra agricultura



EMILIO PACHECO R.

“He escuchado . . . que la gente puede comenzar a depender de nosotros en materia de alimentos. Sé que no se supone que eso sea una buena noticia. Para mí es una buena noticia, ya que ante todo los pueblos tienen que alimentarse. Y si se busca una forma de lograr que los pueblos se inclinen ante uno y dependan de uno, en cuanto a su cooperación, me parece que la dependencia alimentaria sería estupenda”. (Hubert Humphrey, Senador Demócrata en el Congreso norteamericano).

Afirmar que la agricultura está en crisis, ya no resulta novedoso para nadie. A través de remitidos, declaraciones de prensa y marchas públicas, los productores agrícolas han logrado captar la atención de la opinión pública en torno a su crítica situación. Se habla de costos en aumento y de precios estancados que convierten a la agricultura en una actividad cada vez más ruinosa. Los habitantes de las ciudades comienzan a sentir en carne propia los efectos de la postración agrícola. Sobre todo a partir de 1973, cuando se presentó una larga sequía, el abastecimiento de alimentos se hizo problemático y en algunos renglones la escasez fue la característica dominante. El tradicional recurso de las importaciones, expediente cómodo para un país con abundante disponibilidad de divisas, tropieza con serios obstáculos que contribuyen a agravar el desabastecimiento. Por una parte, las existencias de los países exportadores han mermado sustancialmente; y por la otra, los precios internacionales se han disparado en aumento, convirtiendo la importación en un recurso oneroso para cualquier país. Productos como el trigo, que Venezuela importa en grandes cantidades, se hacen cada vez más escasos y costosos. Y no parece estar lejos

el día en que los cereales y otros rubros alimenticios se conviertan en bienes tan valiosos y estratégicos como el petróleo.

La evidencia de la crisis agrícola ha movilizó un conjunto de acciones que aspiran a enfrentar exitosamente el reto planteado. La campaña electoral de 1973 giró, en buena parte, en torno a promesas vinculadas a la solución de los problemas del campo venezolano.

En este contexto, el gobierno ha invitado a algunos expertos extranjeros para asesorar los programas oficiales de desarrollo agrícola. Recientemente, el profesor René Dumont, agrónomo francés con vasta experiencia en la materia, realizó una breve visita a nuestro país. Como resultado de sus observaciones entregó al IAN un diagnóstico de la situación actual de la agricultura con algunas proposiciones que sirvan de orientación en la implementación de la política agrícola (1).

La importancia del “Informe Dumont” reside en dos de sus características más notables: la sencillez y claridad del diagnóstico, y la perspectiva global asumida en el análisis. La sencillez y claridad son imprescindibles —y un tanto escasas en nuestros medios universitarios— si se quiere

re convertir a los campesinos en los sujetos activos del desarrollo agrícola. La jerga académica resulta innecesaria para plantear ajustadamente la cuestión agrícola, y las más de las veces se convierte en un instrumento de manipulación en manos de técnicos urbanos que no distinguen un becerro de un maute.

La perspectiva global del “Informe Dumont” introduce elementos novedosos, hasta ahora soslayados, en la comprensión integral del problema agrario. No se trata simplemente de una cuestión de costos y precios. La crisis agrícola y el desabastecimiento alimenticio tienen serias repercusiones en la independencia política y económica del país como lo atestigua la citada declaración del Senador Humphrey. Los problemas de desempleo urbano y marginalidad están profundamente anclados en el desajuste provocado por la insuficiencia del desarrollo del campo venezolano. Como afirma el presidente de FEDEAGRO, Aníbal Santeliz, la economía venezolana continuará en desorden, mientras no se produzca una solución frente al problema agropecuario.

El estancamiento del campo no constituye un simple estrangulamiento de un sector aislado de la economía nacional. Una producción alimenticia deficiente trae consigo, como efecto inmediato, el descenso de los niveles mínimos de nutrición. La alimentación, insuficiente en cantidad y defectuosa en calidad, disminuye el rendimiento de los trabajadores y eleva los

costos sociales de atención médica en el tratamiento de las enfermedades derivadas de esta sub-alimentación.

Frente al desabastecimiento, los diferentes gobiernos han recurrido siempre a las importaciones masivas. Como medidas de emergencia, tales importaciones pueden justificarse. Pero cuando las remesas extranjeras se incrementan a un ritmo inter-anual del 6% —período 1964-1972— esta política resulta peligrosa para la soberanía del país.

Según los datos del CENDES y COPLANARH —citados por Dumont— para alimentar a los 28 millones de venezolanos del año 2000, al nivel de Europa Occidental en 1970, se precisa un ritmo de crecimiento de la producción de un 6% anual. ¡Y el actual ritmo apenas alcanza al 2%! Ciertamente, las esperanzas de autoabastecernos y aún de exportar productos alimenticios parecen estar muy lejanas.

¿Por qué un país que tradicionalmente vivió de la exportación de productos agrícolas, se ha convertido en un importador impenitente de alimentos? Sin duda, la respuesta a esta pregunta podría ocupar más de una investigación bastante amplia. Pero consciente de los riesgos del esquematismo, creo que es fundamental presentar una breve panorámica histórica de este proceso para acercarnos a la comprensión de la situación actual.

Hasta la llegada de las compañías petroleras, Venezuela se caracterizó por ser un país agrario. Gran parte de la mano de obra disponible estaba empleada en el campo. La composición de las exportaciones estaba dominada por los productos agrícolas —café, cacao, cueros, dividive, sarrapia, etc.— Pero afirmar que Venezuela era un país agrario, así a secas, puede conducirnos a un grave error de apreciación. También fueron países agrarios Inglaterra, Francia y los Estados Unidos. ¿Dónde radica entonces la diferencia? Desde la época colonial la dinámica interna de la agricultura venezolana —a diferencia de los países citados— estuvo dirigida por los intereses de las potencias extranjeras. Sometido a la dominación Europea, Venezuela cumplió el papel de proveedor especializado de frutos y de materias primas para alimentar al viejo continente. De esta manera las mejores tierras y la casi totalidad de los recursos estaban dedicados a la explotación de uno o dos productos de exportación —en el caso venezolano el cacao y el café—. La producción de alimentos fue marginada sistemáticamente al área de la economía campesina de subsistencia, sin posibilidad alguna de acumular los excedentes que hubiesen permitido la introducción de nuevas técnicas y el me-

joramiento de los rendimientos. La demanda interna era cubierta, con dificultad, por una agricultura sumida en una postulación crónica y por un volumen de importaciones siempre en aumento.

La explotación industrial del petróleo trajo consigo la expansión del comercio y los servicios urbanos. El capital encontraba más rentable los negocios fáciles de la ciudad que el duro trabajo de sembrar la tierra y cosechar sus frutos. Detrás de los capitales que migraban hacia Caracas, Valencia y otras ciudades, venía la mano de obra que ya no encontraba oportunidades de empleo en un país cada vez más reducido comercio y a la burocracia oficial. Pero al llegar a la gran ciudad, el espejismo de la abundancia para todos se convirtió en la frustración de los barrios llenos de ranchos donde duerme el desempleo, y siempre se amanece con alguna esperanza. Venezuela se fue quedando sin agricultores, sin empresarios agrícolas y sin campesinos. ¿A quién puede extrañar la crisis actual?

En 1960, el gobierno se propuso revitalizar la producción agrícola. La política de sustitución de importaciones y la Reforma Agraria estaban dirigidas hacia ese objetivo. La creación de una demanda industrial de materias primas y la expansión del mercado interno de alimentos dieron un impulso expansivo al agro venezolano. Las tasas de crecimiento se elevaron a niveles nunca vistos. Productos como el arroz, el azúcar y algunos más experimentaron un incremento vertiginoso. Pero este proceso se agotó rápidamente. La Reforma Agraria, una medida más política que económica, se convirtió en un ruidoso fracaso. Un grupo de grandes empresarios agrícolas, vinculados a la industria, se consolidó. Los pequeños y medianos productores, el eslabón más débil de la cadena, se han visto ahogados por el alza de los costos, el congelamiento de los precios y la extorsión de la red de intermediarios asociados en las famosas e “invisibles” roscas. Al cabo de 15 años el máximo dirigente de Acción Democrática, el partido de los campesinos, tiene que confesar que “en agricultura tenemos que partir de cero”.

En este momento, cuando Venezuela se dispone a recobrar la soberanía sobre el petróleo y a utilizarla como instrumento eficaz en el logro de un ordenamiento mundial más justo, el desarrollo agrícola se convierte en alta prioridad de la política nacionalista. El poder de negociación de nuestro país en el escenario mundial supone, como condición necesaria, la reducción de su dependencia externa. Solo una política audaz y correcta en el sector

agrícola nos permitiría:

1. reducir la importación de alimentos
2. mejorar la nutrición
3. suprimir los riesgos de la escasez
4. alimentar las fábricas del país
5. reducir la necesidad de divisas extranjeras.

Alcanzar estas metas no es tarea fácil. Pero es posible avanzar un trecho significativo en esta dirección. La exigencia fundamental de este despegue es la de convertir la agricultura en una actividad verdaderamente rentable. El Estado debe cumplir un papel primordial en este proceso, y su intervención a través de proyectos, créditos y medidas proteccionistas es imprescindible. Pero una agricultura ruinoso no puede recuperarse únicamente a base de subsidios, a “realazos”. Si los agricultores y campesinos sólo cosechan pérdidas para ser auxiliados periódicamente por “papá” Estado, la ineficiencia y la improductividad invadirán la actividad. Y el fantasma del déficit y el desabastecimiento reaparecerá de nuevo.

La rentabilidad de la agricultura venezolana no depende solamente del alza de los precios pagados a los productores. Se está convirtiendo en mala costumbre de productores agrícolas e industriales, el llo-riqueo por mejores precios cada vez que sus empresas registran pérdidas. Sin despreciar la utilidad de estos incrementos en algunos renglones específicos, no siempre constituyen medidas económicamente sanas. Pocos son los que antes de increpar al gobierno se ocupan de analizar la productividad de sus empresas. La sub-utilización de los recursos disponibles —pastos, sistemas de riego, etc.—, la desorganización y el desorden en la administración, el despilfarro y la poca capacitación de la mano de obra, son costos innecesarios que no se eliminan automáticamente al subir los precios.

¿Por qué no dedicar mayor esfuerzo a racionalizar los costos, a organizar más eficientemente los factores de producción? Ciertamente es el camino más largo y laborioso y, el facilismo de nuestra cultura petrolera simpatiza muy bien con la filosofía del mínimo esfuerzo.

Una agricultura próspera, en expansión es posible. Pero es necesario abandonar la actitud que ve en el campo un “hobby” para los fines de semana, un lugar para el esparcimiento y la distracción de empresarios urbanos. Si la industria es una actividad compleja que requiere atención y organización eficiente, la agricultura lo es en muchísimo mayor grado. Y mientras no estemos dispuestos a reconocerlo y a actuar en consecuencia, nuestra soberanía estará hipotecada.

(1) Ver el informe en la sección Documentos de este número.